

**es público,
es tuyo**

Sálvalo



#espúblicoSálvalo

**Campaña de defensa
de lo público**





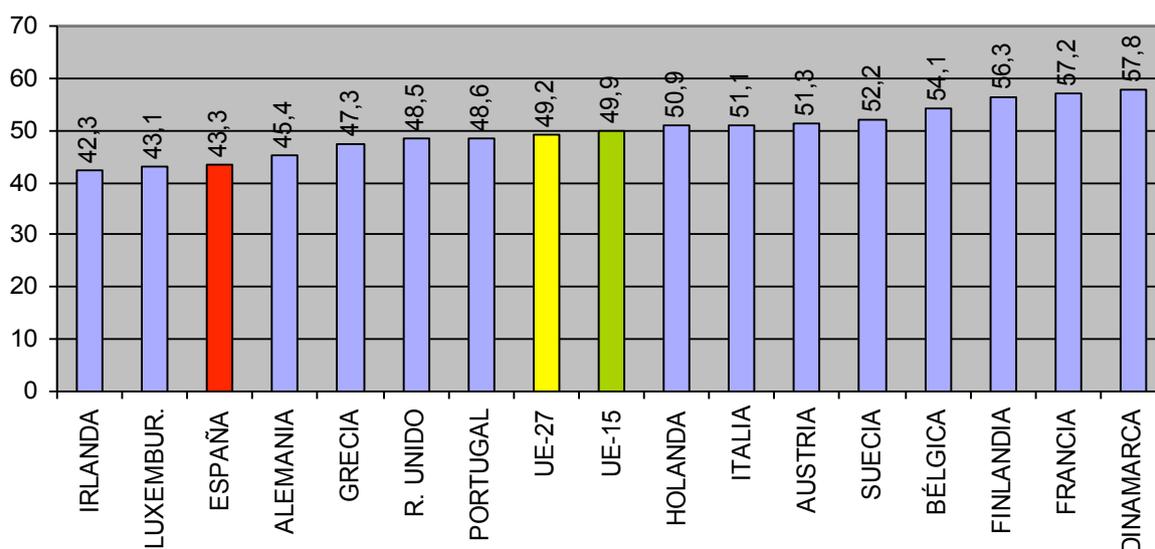
es público, es tuyo **Sálvalo**

Los Presupuestos del Estado para 2014 que se están tramitando en este momento, así como los presupuestos autonómicos y locales que deberán ajustarse a los mismos criterios que los primeros, suponen una nueva vuelta de tuerca en la política de recortes del conjunto de los Servicios Públicos. Los efectos van a ser especialmente graves al afectar a unos Servicios Públicos que ya han sufrido sucesivos recortes y a una ciudadanía en proceso acelerado de empobrecimiento, que los necesita más que nunca.

No es cierto que el Sector Público esté sobredimensionado. Nuestro gasto público está muy por debajo de la media europea, con un 43,4% del PIB frente a casi el 50% en la zona Euro. Los países más avanzados y que mejor están sorteando la crisis, tienen porcentajes de gasto público superiores.

GASTO PÚBLICO EN LA UNIÓN EUROPEA EN % DEL PIB (2013)

Fuente: Comisión Europea



Hay que frenar la destrucción del sector público e iniciar su proceso de recuperación, al ser un elemento esencial para la superación de la crisis y la reactivación del empleo, además de servir de freno al insostenible crecimiento de la desigualdad en nuestra sociedad. Si por el contrario continúan los recortes y el deterioro de los Servicios Públicos, se va a seguir debilitando la cohesión social y la propia calidad democrática del país.

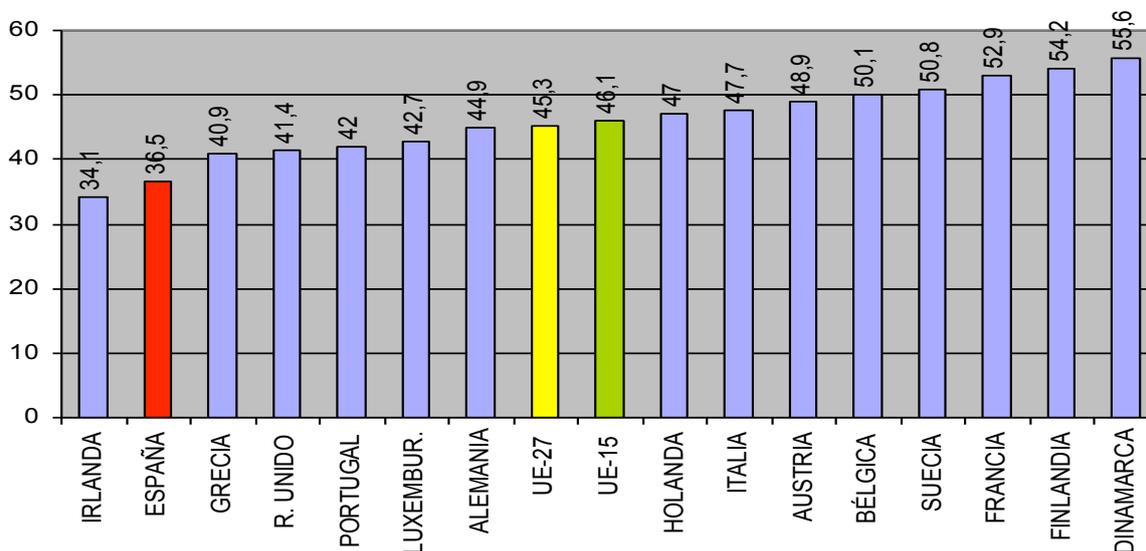
Es posible recuperar y mejorar los Servicios Públicos, el problema de nuestro país es de ingresos fiscales, no de gasto, resultando escandalosa nuestra posición a la cola de Europa en este campo. Hay que incrementar los ingresos públicos con una reforma fiscal que haga pagar más a las grandes empresas y patrimonios, acompañada de una gran campaña de persecución del fraude fiscal y la economía sumergida.





INGRESOS FISCALES EN LA UNIÓN EUROPEA EN % PIB (2013)

Fuente: Comisión Europea



La crisis económica está siendo aprovechada como coartada para demoler el modelo social europeo, que es el que recoge nuestra Constitución. Este ataque a lo Público es el elemento fundamental de la ideología neoliberal, hegemónica tanto en Europa en general, como en nuestro país en particular, y supone la privatización de las actividades con mas beneficios, junto con el deterioro de las que se mantengan en la esfera pública para empujar a la ciudadanía hacia los servicios privados.

El proceso de privatización y deterioro de los Servicios Públicos va acompañado de tasas disuasorias y copagos o repagos según los ámbitos, por lo que nos encontramos ante la transformación encubierta de lo que era un derecho subjetivo y universal a esos Servicios Públicos, vinculado a la condición de ciudadanía, que pasa a convertirnos en meros consumidores de servicios provistos por el mercado, a los que se accede en función de los recursos económicos con los que se cuenta.

Los nuevos recortes anunciados para 2014 aparentemente no son tan agresivos como los de años anteriores, pero en realidad resultarán más dañinos, al afectar a presupuestos que en muchos casos ya están por debajo del nivel mínimo que garantiza la prestación adecuada de los servicios. En este sentido, al mantenerse la prohibición de reponer las bajas que se producen en el sector público por jubilación u otras causas, con la excepción de un mínimo porcentaje (10%) en algunos sectores, las plantillas van a seguir disminuyendo, lo que afecta directamente a la calidad de los servicios.

Unos Servicios Públicos eficaces y eficientes son la mejor defensa contra la corrupción. Con una seguridad pública, justicia e inspección tributaria, laboral, medioambiental, que cuente con suficientes medios humanos y técnicos, se puede hacer frente a la ola de corrupción que también contribuye a alejarnos de los países más avanzados de Europa.

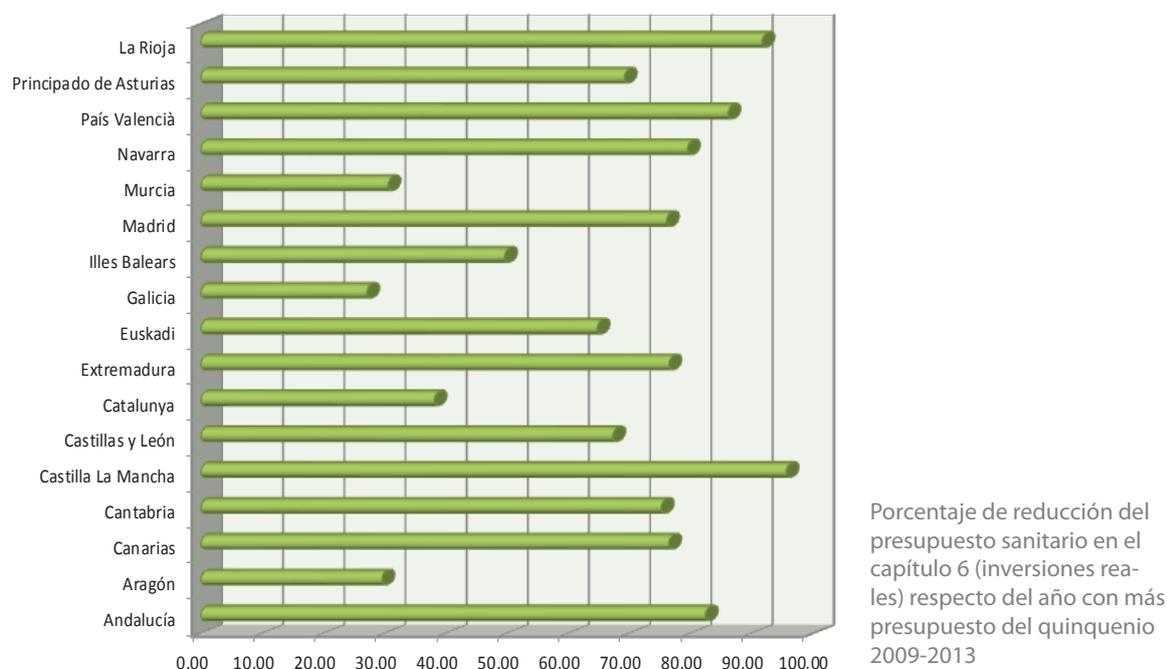
Es necesario garantizar la transparencia y el control democrático de la gestión del gasto público, para acabar con los despilfarros y mala gestión que pueda existir, como condición ineludible para la recuperación de los Servicios Públicos.



La defensa de los Servicios Públicos supone defender el futuro, de nuestra sociedad y de nuestro país. No podemos permitir un proceso de deterioro y en algunos casos, desaparición, que nos acerque a un pasado que creíamos superado.

¿qué pasa cuando se recorta en sanidad?

Los sucesivos recortes que se están produciendo en Sanidad desde 2010 han situado los presupuestos sanitarios de las Comunidades Autónomas en cifras inferiores a las destinadas para el año 2007. Nos encontramos ante un retroceso histórico que pone en peligro al Sistema Nacional de Salud, tal y como lo conocíamos no hace mucho tiempo.



Recortar en Sanidad significa perder la universalidad de la atención sanitaria. Desde un criterio economicista se plantean generar un menor coste y aminorar la atención. Por ello eliminan la prestación a numerosos colectivos, generalmente los más necesitados, y sitúa al margen de la atención sanitaria a algo más de 873.000 personas. Esta desatención comienza a provocar problemas de salud pública e incrementar las desigualdades.

Recortar en Sanidad es la primera medida para desacreditar al SNS y proceder a su desmantelamiento mediante la privatización, no solo de la gestión sino de la provisión. Desde el eufemismo de la colaboración público-privada y que básicamente significa privatizar, están mercantilizando la salud, encareciendo su coste y priorizando el negocio frente a la salud. Nuestro Sistema Sanitario





Público es el resultado de un esfuerzo de solidaridad entre quienes tienen buena salud y quienes no la tienen, entre quienes tienen más recursos y quienes carecen de ellos y es uno de los pilares del modelo de estado social que hemos acordado y actualmente está en peligro.

Recortar en Sanidad provoca el cierre o la reducción de Centros, Servicios, Quirófanos y la eliminación de camas hospitalarias. Medidas que provocan una menor cantidad y calidad de las prestaciones y que están encaminadas a justificar los despidos de personal y la ausencia de inversiones para mantener el SNS en condiciones idóneas

Recortar en Sanidad significa que un sector con un alto grado de especialización y cualificación, donde la investigación, el desarrollo y la innovación son fundamentales, la falta de inversión produce un desfase tecnológico difícil de recuperar. Desfase aprovechado por el sector privado, de tal manera que el sector público es subsidiario de la tecnología de aquel y tenga la necesidad imperiosa de concertar.

Recortar en Sanidad significa reducir empleo y precarizar el existente. Se han disminuido las plantillas de forma notoria fundamentalmente a costa del personal eventual e interino. En el período 2011-2013, 1er trimestre, se han perdido 52.800 puestos de trabajo, 41.500 solo en 2012. Ello significa una pérdida del 8,9%, pasando de 590.300 a 537.500 trabajadores/as. Se han reducido significativamente las plazas de personal en Formación, el 11,58% en el período 2010-2014.

Recortar en Sanidad significa incrementar las listas de espera, tanto para pruebas diagnósticas como quirúrgicas. Justificante necesario para derivar pacientes a centros privados y avanzar en la presencia de los mercados en el ámbito sanitario. En este apartado cabe destacar el oscurantismo al que nos tienen acostumbrados todas las Comunidades Autónomas a la hora de facilitar datos fiables sobre la evolución de las listas de espera.



Recortar en sanidad significa que los Servicios de Urgencias se colapsen. La utilización de los servicios de Urgencias es en algunos casos la única vía de acceso de numerosos colectivos a la atención sanitaria.

Recortar en Sanidad significa deteriorar la Atención Primaria, está constatado que una Atención Primaria con suficientes recursos y financiación contribuye a una población con mejores niveles de salud a un menor coste, demostrando una mayor eficacia, seguridad, eficiencia y equidad. Además de ser un importante filtro que evita la masificación de los Servicios de Urgencias

Recortar en Sanidad significa crear nuevos copagos y repagos, incrementar las aportaciones de los usuarios en los que ya existían, establecer tramos pocos equitativos en las aportaciones generando mayores desigualdades. El copago dificulta el acceso a la asistencia a los sectores con menos recursos y a quienes más utilizan los servicios. El copago afectará a la promoción y la prevención de la salud. Está empezando a producirse que la falta de recursos económicos impide el acceso a la asistencia sanitaria o las prescripciones farmacéuticas.



Recortar en Sanidad significa reducir las prestaciones a través de la modificación de la cartera de servicios donde se pasa de una cartera única de servicios a otra con tres niveles más una complementaria de las Comunidades Autónomas. Con el solo objetivo de incrementar las aportaciones de los usuarios en prestaciones como: farmacéutica, ortoprotésica, transporte sanitario no urgente

Recortar en Sanidad significa incrementar la jornada laboral de los profesionales, significa reordenar, en muchos casos eliminar, puntos de atención continuada y reducir el número de profesionales en los Servicios de Urgencias

Recortar en Sanidad significa que la atención no va a prestarse en las mejores condiciones, a pesar de los esfuerzos profesionales. Reducir los recursos humanos y materiales acarrea una reducción en la calidad asistencial

Recortar en sanidad no contribuye ni a la sostenibilidad del sistema, ni a la mejora de la calidad y seguridad de las prestaciones. Nuestro Sistema Público de Salud está basado en principios de: universalidad, equidad, solidaridad y gratuidad, que no pueden compatibilizarse con el recorte y el ahorro indiscriminado en prestaciones, derechos y garantías. Infr FINANCIARLO es la excusa perfecta para su deterioro y el argumento necesario para su privatización.

¿qué pasa cuando se recorta en educación?

En los últimos años se han producido intensos recortes en educación. En 2009 nuestro país alcanza el techo de gasto público educativo medido en porcentaje del PIB (5,1%) y desde esta fecha nuestra inversión educativa no ha dejado de caer, fruto de los recortes practicados por los Gobiernos central y autonómicos. Las políticas educativas de la derecha debilitan la educación y la enseñanza pública, tratando de abrir camino al mercado. Por esa razón, los recortes se han cebado exclusivamente en la educación pública, tanto en los niveles no universitarios como en la educación superior.

Si comparamos el capítulo de educación de los Presupuestos Generales del Estado, vemos que, entre 2010 y lo previsto en el anteproyecto de presupuesto para 2014, el gasto educativo ha caído un 30,5%. Hemos perdido casi un punto de porcentaje del PIB en inversión educativa y seguimos cayendo, porque el Gobierno ha comprometido con la UE llegar a un 3,9% del PIB en inversión educativa, lo que constituye un despropósito que nos retrotrae décadas atrás, cuando la educación no era obligatoria hasta los 16 años y la Educación Infantil no estaba universalizada, como ahora, desde los 3 años.

Entre enero de 2012 y enero de 2013 se han perdido 24.957 empleos de profesores/as en la enseñanza pública no universitaria. Y ello a pesar de que hay 80.000 alumnos/as más. En el mismo periodo se han eliminado 4.321 plazas de profesores/as en las universidades públicas y 1.655 efectivos del personal de administración y servicios educativos complementarios. En sólo un año nuestro sistema educativo ha perdido casi 31.000 profesionales. Si nos referimos a los tres últimos cursos la cifra rondaría los 60.000.

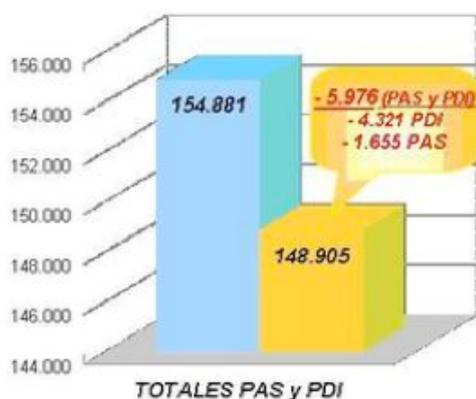




PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR CLASE DE PERSONAL									
DOCENTES DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA									
	Funcionarios			Otro Personal (Interino)			TOTAL		
	2012	2103	Dif.	2012	2103	Dif.	2012	2103	Dif.
CCAA	419.362	409.957	-9.405	87.163	71.954	-15.209	506.525	481.911	-24.614
MECD	2.903	2.818	-85	1.151	893	-258	4.054	3.711	-343
	422.265	412.775	-9.490	88.314	72.847	-15.467	510.579	485.622	-24.957

■ Enero de 2012
■ Enero de 2013

**Evolución del Personal (PAS y PDI)
Universidades Públicas**



Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los efectos de estas políticas se miden en términos de deterioro de la calidad y de quiebra de la equidad. En la educación no universitaria se han incrementado las ratio de alumnos por clase en un 10% y se han perdido muchas horas de desdoble en Lengua y Matemáticas. Donde antes se podían dar algunas horas de Lengua y Matemáticas con 20 alumnos, ahora se hace con 33 o más. También se han reducido drásticamente las horas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con asignaturas pendientes, las horas de biblioteca, las destinadas a actividades extraescolares y complementarias y las horas de tutoría con alumnos. En resumen, menos calidad para todos y el alumnado que precisa medidas de apoyo, abocado al fracaso escolar.

En la educación superior, los recortes estrangulan económicamente a las universidades, mientras el Gobierno impone la subida de las tasas universitarias en paralelo a severos recortes en el capítulo de becas y a requisitos más exigentes para acceder a las ayudas. Y todo ello a pesar de que España es el tercer país de la UE-15 con las tasas universitarias más altas y el octavo de la UE-27. Sin embargo, somos de los últimos en lo que se refiere al número de alumnos que acceden a una beca. Mientras en Gran Bretaña el 60% del alumnado universitario tiene acceso a alguna ayuda pública, en España solo disfrutan de esta situación 23 de cada 100. El curso pasado, al menos 30.000 universitarios abandonaron sus estudios como consecuencia del efecto combinado del incremento de las tasas junto con la reducción de las becas, y este curso la cifra será aún mayor, lo que dibuja una universidad más clasista a la que no pueden acceder las capas sociales más desfavorecidas e incluso determinados segmentos de las clases medias. Y la cosa no parará aquí: el PP se ha planteado derivar paulatinamente a los usuarios el coste real de la plaza universitaria, que podemos cifrar en 9.000 euros por curso.



La lógica de derivar a los usuarios una parte cada vez mayor del coste real del servicio se ha instalado en muchas comunidades autónomas, que han incrementado significativamente las tasas en Educación Infantil y que han creado nuevas tasas en la Formación Profesional de Grado Superior, lo que impide el acceso a estos niveles educativos a muchos ciudadanos/as.

Por otro lado, los recortes educativos dejan sin plaza a muchos alumnos, sobre todo en la Educación Infantil y en la Formación Profesional. Decenas de miles de alumnos se quedan sin obtener la plaza de FP que demandan. Jóvenes que aspiran a mejorar su formación ante la dificultad de acceder a un empleo y que se ven en el paro y con las puertas del sistema educativo cerradas por falta de plazas públicas, en lo que constituye un enorme despilfarro de capital humano y un mensaje demoleedor para los jóvenes de falta de expectativas de futuro.

Mientras han recortado hasta el extremo las becas de comedor y las ayudas para libros de texto, se mantienen desgravaciones fiscales para pagar el uniforme escolar de las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada, en lo que constituye un ejemplo sangrante de la redistribución regresiva: se quitan los recursos que atienden a los hijos de los desempleados, que los necesitan, y se destinan a quienes no los necesitan.

Los recortes están cambiando la fisonomía del sistema educativo. Debilitan la escuela pública, que es la que garantiza la universalización del derecho a la educación, reducen las medidas de apoyo al alumnado que las precisa para garantizar su éxito escolar, acaban con las becas y ayudas a la vez que incrementan las tasas... En definitiva, ponen en cuestión el efectivo ejercicio del derecho a la educación y dibujan un sistema educativo más clasista. Por eso, el primer borrador de la LOMCE caracterizaba la educación como un bien y no como un derecho. Un derecho tiene carácter subjetivo y va aparejado a la condición de ciudadanía; un bien lo provee el mercado y se accede a él en función de la posición relativa que se tiene en el mercado. Quieren acabar con el derecho a la educación y la LOMCE es el compendio de todas las políticas de recorte, de abandono de la educación y de la enseñanza pública, además de selectiva, segregadora y retrógrada. Por eso nos movilizamos contra los recortes y las reformas educativas regresivas. Porque sin educación no hay futuro.

¿qué pasa cuando se recorta en otros servicios y administraciones públicas?

Los recortes en el resto del Sector Público pretenden basarse en que España tiene un Sector Público sobredimensionado, lo cual es totalmente falso. En el año 2008 el peso del empleo en el Sector Público en España era del 12,9% de la población activa, frente al 18% de media en la OCDE. Nuevamente los países más avanzados, con un Estado del Bienestar más sólido y que mejor han superado la crisis son los que tienen mayores tasas de empleo público (34,5% en Noruega, 31,5% en Dinamarca, 22,9 en Finlandia). Solo Turquía, presenta índices más bajos en Europa. Y si bien creció algo

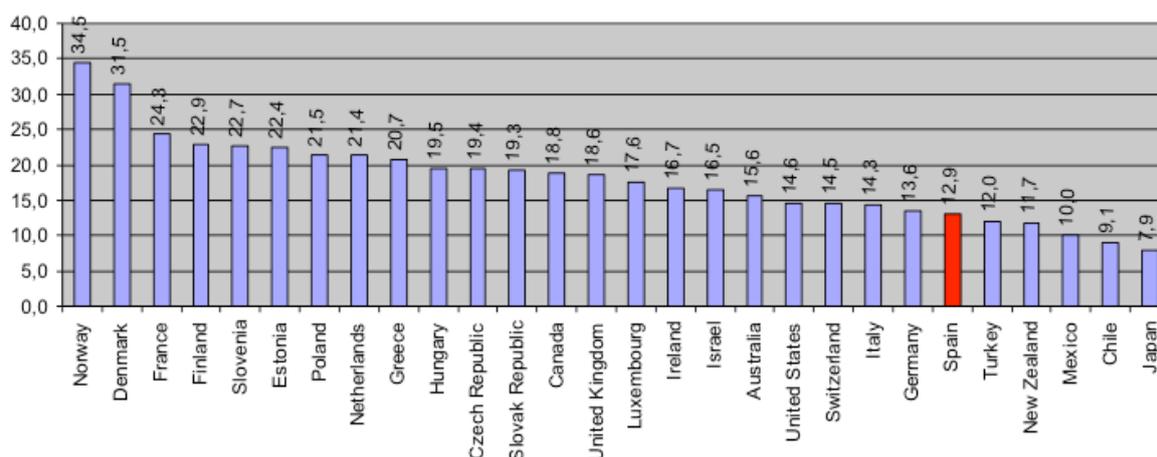




la cifra entre 2008 y 2010, el intenso proceso de destrucción de empleo público de los dos últimos años hace que en la actualidad la cifra sea inferior a la de 2008

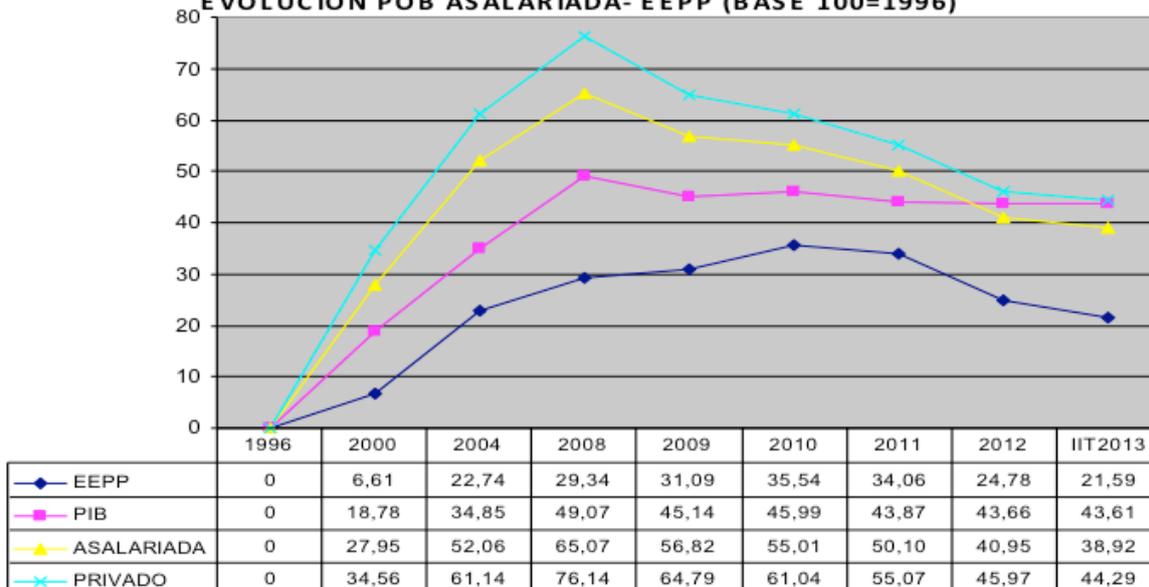
% EMPLEO PÚBLICO SOBRE POBLACIÓN ACTIVA 2008

(Fuente: "Government at a Glance 2011" OCDE-2011)



De hecho, en España el empleo público lleva tiempo perdiendo peso. En la época de crecimiento económico creció a mucho menor ritmo que el empleo total y, si bien es cierto que con el inicio de la crisis tardó más en destruir empleo (como consecuencia, principalmente, de que los procesos de acceso al mismo se realizan con años de retraso), desde el año 2011 lo viene haciendo con mucha intensidad (y el año 2014 apunta a una nueva e intensa destrucción de empleo público).

EVOLUCIÓN POB ASALARIADA- EEP (BASE 100=1996)





Los recortes están afectando de forma especialmente grave a los servicios sociales y el sistema de atención a las personas dependientes (SAAD), que son una pieza decisiva del Estado de bienestar al ser considerados como su cuarto pilar. Dispone de programas, centros y servicios que permiten la inserción social, la normalización de las condiciones de vida, la autonomía personal o los cuidados. Desde finales de los 90 era el sector más dinámico en creación de empleo en términos absolutos. Con los recortes y otras reformas (Proyecto Ley Administraciones Locales) se está desmantelando.

Los Servicios Públicos de Empleo (SPE), han sido, junto con el FOGASA, los organismos en los que más ha crecido la actividad durante la crisis, como consecuencia del incremento del desempleo. Con el Gobierno del PP, los programas de Políticas Activas de Empleo se reducen más del 56%, con una radical recorte de servicios de atención directa a personas desempleadas, pero también a ocupados y empresas que acuden a las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo.

Nuestro país necesita un nuevo modelo productivo, donde la investigación, el desarrollo y la innovación, deben jugar un papel fundamental. Sin embargo se está dejando a los Organismos Públicos de Investigación (OPI's) sin financiación y sin becas. Históricamente estos organismos han tenido una alta temporalidad, al depender los contratos de las personas de diferentes becas, subvenciones y ayudas que actualmente se están recortando. Después de invertir en su formación, nuestros investigadores e investigadoras tienen que emigrar de nuestro país para poder desarrollar su trabajo.

Los medios de comunicación escritos y audiovisuales han perdido la independencia que les debería de caracterizar, están a lo que les dictan los poderes fácticos, los partidos políticos de gobierno y las grandes corporaciones de las que dependen, dando una información totalmente sesgada. En una campaña de clara orientación ideológica, se están desprestigiando y devaluando las radio-televisiones públicas, ofreciendo una baja calidad en su programación y sufriendo abultados procesos de despidos (ERE's).

Una buena, profesional y eficaz seguridad pública, justicia e inspección tributaria, laboral, medioambiental, contribuyen a la lucha contra la corrupción. El abandono y deterioro de estos servicios públicos asientan las condiciones favorables para que conductas de evasión de capitales, enriquecimiento fraudulento, especulación, deterioro ambiental sean la seña de identidad de la Marca España. A modo de ejemplo y según los propios datos del Gobierno, se calcula que existen aproximadamente unos 10.000 expedientes de evaluación ambiental en tramitación en toda España, cuya duración media en la Administración General del Estado es de 3,4 años. En la inspección laboral en España se calcula que hay un inspector de trabajo por cada 23.300 ocupados. En la UE, la media es de uno por cada 12.000 empleados.

Los recortes en el transporte público –y las infraestructuras del transporte- están sometiéndolo a una fuerte presión de desprestigio, con subidas de tarifas, disminución de frecuencias, privatizaciones y despidos de personal que provocan un continuo deterioro en la prestación de sus servicios, con la consiguiente pérdida de calidad y atención. Hay que señalar que este transporte público está considerado como un servicio esencial protegido por la Constitución que enriquece la calidad de vida las personas facilitando sus desplazamientos y su interacción en sociedad.

Los continuos recortes suponen que la Administración Pública en sus diferentes niveles, estatal, autonómico y local, está perdiendo capacidad para realizar las múltiples funciones que tiene encomendadas. Pérdida de derechos de empleados y empleadas públicas, rebajas salariales y lo más





importante, una oferta pública de empleo cero, sumada a una destrucción de empleo temporal y amortización de vacantes que está reduciendo de forma alarmante el capital humano de la Administración. Esto se traduce en que funciones como la vigilancia y demás tareas de prisiones, control urbanístico, institutos estadísticos, meteorológicos, registros, justicia, seguridad social, ... se vean abocados a una prestación deficiente de su trabajo y en algunas ocasiones a su privatización, que es lo que se persigue en última instancia.

Con la reforma de la Administración Local que se está tramitando, deja de estar garantizado el principio de proximidad de la administración a la ciudadanía, impidiendo o dificultando, según el tamaño de la administración local, el participar en la prestación de servicios y desarrollo de actividades que atiendan las necesidades específicas de sus vecinos y vecinas. Siendo especialmente grave la desaparición o recorte en los servicios de atención a las personas con necesidad social, dependientes o cualquier colectivo desfavorecido, así como la imposibilidad de mantener los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y los programas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

El servicio postal público lo sostienen más de 55.000 empleados/as públicos/as que recorren más de 67.000 km. diarios llevando y entregando cartas u objetos a 46 millones de ciudadanos a cualquier punto de la geografía de nuestro país, conectando los más de 8.100 municipios de toda España. Esto dejará de suceder si la liberalización, los mercados y el recorte de inversión pública continúan destruyendo empleo (10 mil en dos años), cerrando oficinas rurales y urbanas, quitando carteros y rutas postales y obligando con ello a los ciudadanos a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho.

Las emergencias y la seguridad pública también se están viendo afectadas gravemente por los recortes. Se privatizan y se mercantilizan sus servicios, situación que vemos día a día como afecta a la ciudadanía con graves problemas de actuación y coordinación en incendios forestales, catástrofes, persecución de los delitos contra las personas y sus propiedades, el medio ambiente y demás situaciones. En igual situación se encuentra el transporte sanitario en servicios de emergencia, que no es solo un derecho para el desarrollo de la vida de las personas, sino que es un servicio esencial para garantizar la vida misma en situaciones de emergencia sanitaria cuando la propia vida corre riesgo y depende del tiempo de respuesta y la calidad de auxilio.

La Justicia está sufriendo un grave y planificado proceso de deterioro por parte del Gobierno, eliminando recursos y suprimiendo empleo, pretendiendo colocar en la esfera de lo privado servicios que son de esencial tutela pública como el Registro Civil. Así como estableciendo un canon general que se disfraza y encubre como tasas solidarias, para dificultar de forma planificada el acceso a una justicia igualitaria y universal, al tiempo que se impulsan medidas para alejar los juzgados de la población, reduciendo su número y prestaciones y se toman medidas para hacer más difícil la atención a las personas, realizando una apuesta contundente por una justicia de clase sólo para el acceso de los pudientes.

El agua ha venido siendo tratada a lo largo de los últimos años, no como un bien y un derecho de la ciudadanía, ni como un recurso básico y esencial para la vida, ni tampoco como un medio para la sostenibilidad, equidad e igualdad, sino como un recurso de explotación económica, un medio de enriquecimiento hasta el punto de generar tantos beneficios como la propia banca. También se ha utilizado como un elemento de confrontación política entre distintos territorios. El crecimiento económico no ha tenido, ni tiene en cuenta, la sostenibilidad de un bien que es de todos, que es un derecho humano.



#espúblicoSálvalo